

141/97

ÍNDICE AI: ASA 33/29/97/s

11 DE AGOSTO DE 1997

PAKISTÁN: LAS PREOCUPACIONES RELATIVAS AL ORDEN PÚBLICO NO DEBEN ANULAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS

Amnistía Internacional ha declarado hoy que el gobierno federal de Pakistán y los gobiernos provinciales del Punjab y Sind no deben responder al deterioro del orden público en ambas provincias con detenciones arbitrarias.

«Las declaraciones realizadas por el primer ministro Nawaz Sharif anunciando que se restablecerá el orden “a toda costa” y se “tensará la soga alrededor del cuello de los enemigos de la paz”, constituyen un terrible augurio de nuevas violaciones de los derechos de los ciudadanos», ha dicho la organización de derechos humanos.

Amnistía Internacional admite la necesidad urgente de restablecer el orden en estas dos conflictivas provincias, pero cree que las detenciones arbitrarias no traerán consigo la paz.

«Esta táctica se ha probado ya anteriormente y ha demostrado ser contraproducente», ha dicho Amnistía Internacional. «Ya es hora de que el gobierno de Pakistán se dé cuenta de que la mejor fuerza disuasoria contra la violencia es el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos pakistaníes. Sólo acatando meticulosamente las disposiciones jurídicas relativas a la detención y siguiendo los debidos procesos legales se restablecerá el orden de manera permanente».

Más de 130 personas han muerto este año en la provincia del Punjab a causa del sectarismo violento que enfrenta a la mayoría sunní y a la minoría chiíta. Los miembros militantes de ambas comunidades no sólo se han matado entre ellos, sino que se han dedicado también a cometer homicidios selectivos de civiles.

Entre las víctimas de estos homicidios selectivos hay cada vez más abogados, médicos y empresarios tanto sunníes como chiítas. Solamente en junio fueron abatidos al menos siete letrados de ambas comunidades. Dos de ellos fueron el abogado sunní Rao Khalil Ahmed, a quien mataron a tiros el 24 de junio cuando se dirigía al Tribunal Superior de Lahore, y el abogado chiíta Shamim Haider Zaidi, muerto el 30 de junio en Multan.

En algunos casos se han lanzado ataques indiscriminados contra lugares de culto, y a consecuencia de ellos han resultado muertos hombres, mujeres y niños inocentes. El 6 de agosto, unas 12 personas fueron abatidas a tiros en Lahore y Multan durante dos ataques efectuados contra sendas mezquitas sunníes. Dos días antes, al menos ocho chiítas habían muerto a tiros en Shorkot.

«El gobierno ha intentado controlar esta violencia religiosa efectuando detenciones masivas

de centenares de personas, a menudo familias o comunidades enteras, que han permanecido recluidas sin cargos ni juicio durante días», ha señalado Amnistía Internacional. «Esta solución no sirve para conseguir una paz duradera; sólo consigue perpetuar la violencia».

El 22 de julio, por ejemplo, la policía asaltó una escuela religiosa chiita de Lahore y detuvo a 175 estudiantes como sospechosos de ocultar a un presunto delincuente. Los detenidos estuvieron recluidos durante varios días.

Decenas de activistas chiitas y sunníes han sido detenidos en aplicación de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público de 1960, que permite la detención sin cargos ni juicio durante un periodo de hasta tres meses, que puede luego ampliarse. En algunos casos, las ordenes de detención dictadas de acuerdo con la Ordenanza no tenían validez legal, pero sólo los más privilegiados han podido recurrir contra ellas ante los tribunales.

«Una y otra vez, la policía parece haber utilizado la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público simplemente porque no tenía pruebas suficientes para presentar cargos penales contra los sospechosos», ha dicho Amnistía Internacional.

En Sind fueron detenidas a lo largo del mes pasado unas 2.600 personas, entre las que había trabajadores de todos los partidos de la oposición. Desde principios de año, la violencia política se ha cobrado en esta provincia más de 400 vidas, y decenas de personas han resultado heridas. En la base del conflicto están las disensiones internas en el Movimiento Nacional Mohajir (*Mohajir Qaumi Mahaz*) – llamado ahora Movimiento Nacional Unido (*Mutahida Qaumi Mahaz (Altaf)* (MQM-A)), y enfrentado al Movimiento Nacional de Refugiados (*Mohajir Qaumi Mahaz (Haqiqi)* (MQM-H)) –, pero la violencia está también motivada por el sectarismo y la delincuencia común.

En Karachi, se han producido ataques contra destacados ciudadanos que no tenían nada que ver con el enfrentamiento entre las facciones étnicas y religiosas. En julio, Shahid Hamid, director gerente de la empresa eléctrica Karachi Electric Supply Corporation, y dos hijos de un alto cargo de la policía fueron víctimas de un homicidio selectivo. Asimismo, Navaid Hussain, fundador de Shehri, organización no gubernamental de defensa del medio ambiente, resultó herido de gravedad el 8 julio, cuando unos pistoleros le dispararon a quemarropa en su oficina de Karachi.

Amnistía Internacional pide a todos los grupos de Pakistán que participan en actividades violentas que acaten los principios humanitarios básicos. Las normas del derecho internacional humanitario prohíben los ataques deliberados o indiscriminados contra civiles.

Las detenciones arbitrarias infringen la Constitución de Pakistán, cuyos artículos 4 y 9 garantizan, respectivamente, que «gozar de la protección de la ley y ser tratado de acuerdo con la ley es un derecho inalienable de todo ciudadano...» y que «ninguna persona será privada de la vida y de la libertad salvo si se hace de acuerdo con la ley».